



UNO.CINCO°

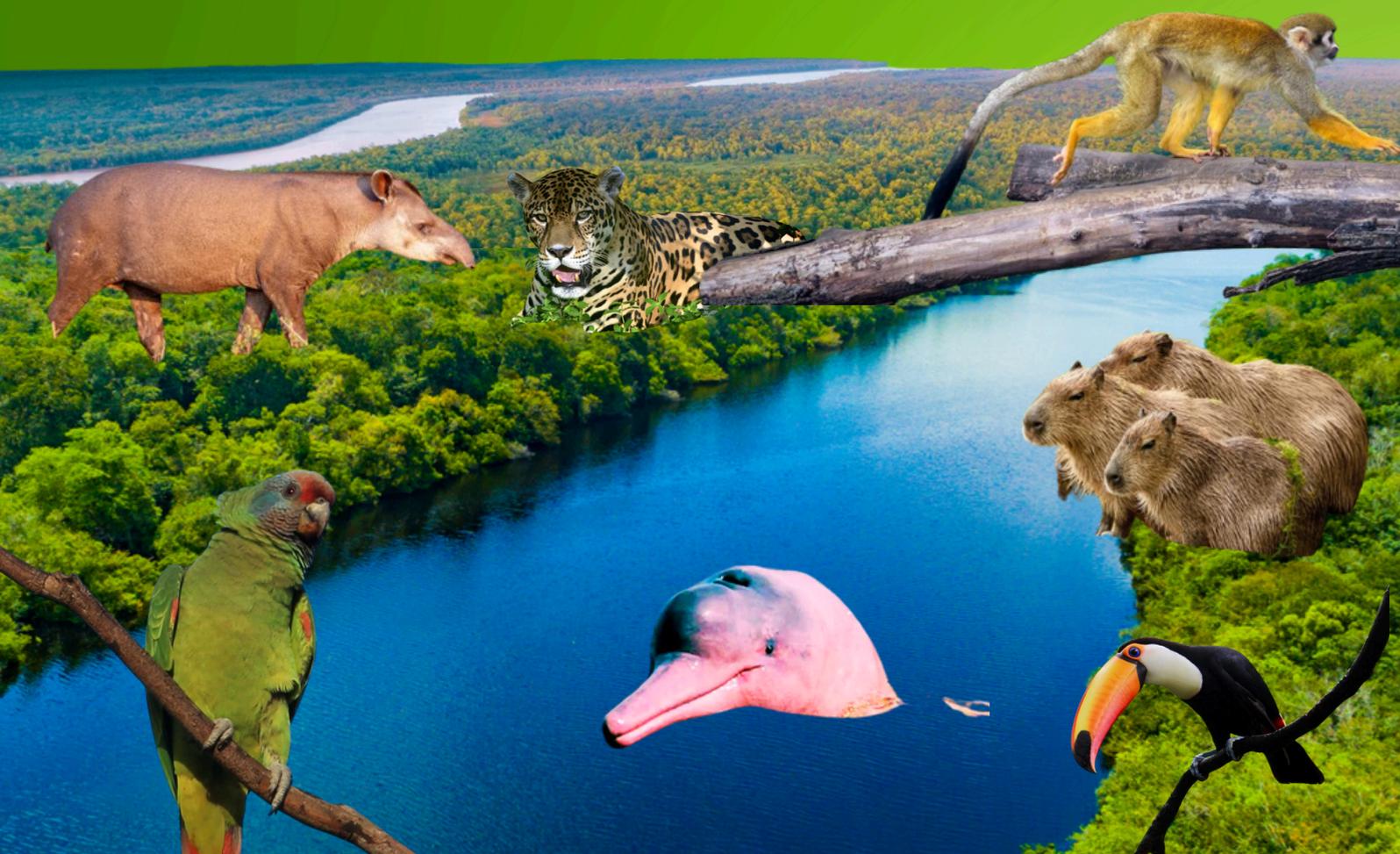
Artículo Camino a la COP30: Conferencia de Cambio Climático de Bonn 2025 (SB62)

Artículo

CAMINO A LA COP30

Algo de lo que pasó, lo que dijeron y qué faltó en la Conferencia de Cambio Climático de Bonn SB62

Felipe Fontecilla y Benjamin Carvajal



Publicado: 17 de junio de 2025

Por **Felipe Fontecilla y Benjamín Carvajal**

RESUMEN EJECUTIVO

La conferencia de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC (SB62), realizada en Bonn entre el 16 y el 26 de junio de 2025, reflejó las tensiones estructurales que atraviesan el sistema multilateral climático internacional. Aunque se avanzó en áreas como transición justa y planificación del financiamiento climático a largo plazo, persistieron profundas diferencias entre países desarrollados y el Sur Global en torno a responsabilidades, financiamiento y mecanismos de seguimiento. La falta de voluntad política por parte del Norte para asumir compromisos estructurales limitó los resultados de la conferencia, dejando múltiples definiciones clave pendientes para la COP30 en Belém.

Uno de los resultados más relevantes fue el impulso al Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP), con la propuesta concreta de crear el Belém Action Mechanism (BAM). Este instrumento busca canalizar apoyo técnico y financiero a procesos de transición baja en carbono que sean inclusivos y participativos. Países del Sur, junto con actores de la sociedad civil, exigieron que este mecanismo incluya la voz de comunidades afectadas, sindicatos y pueblos indígenas, estableciendo así las bases para una arquitectura climática con justicia distributiva.

En cuanto al financiamiento climático, las discusiones en torno al Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG) revelaron la distancia entre el discurso y la práctica. Aunque se presentó el Baku to Belém Roadmap, no hubo avances concretos respecto a los montos, fuentes ni condiciones del financiamiento. Países del Sur demandaron claridad y centralidad del financiamiento público, libre de deuda y alineado con los principios de equidad. En cambio, el Norte insistió en una mayor participación del capital privado, generando temores de un nuevo ciclo de endeudamiento climático.

Los debates sobre adaptación, pérdidas y daños, océanos y agricultura avanzaron lentamente. En adaptación, la falta de consenso sobre indicadores comunes frenó la operacionalización del Objetivo Global. Respecto a pérdidas y daños, no se definieron nuevas fuentes de financiamiento para el fondo establecido en 2023 en la COP28. Asimismo, hubo alertas sobre la captura del enfoque oceánico por soluciones tecnológicas de alto riesgo, como la geoingeniería marina, en desmedro de una acción climática basada en evidencia y derechos.

En síntesis, SB62 dejó claro que los desafíos del sistema multilateral climático son tan políticos como técnicos. Las divisiones geopolíticas y la falta de mecanismos vinculantes para obligar a los países desarrollados a cumplir sus compromisos impiden alcanzar acuerdos estructurales. Aún así, el proceso continúa abierto, y la COP30 en Belém se perfila como una oportunidad crítica para redefinir la arquitectura climática global con justicia, equidad y participación del Sur Global.

1. TRANSICIÓN JUSTA: DE LA NARRATIVA A LA ARQUITECTURA OPERATIVA

Puntos Clave:

- Se presentó una propuesta (**aún no adoptada oficialmente**) denominada el BAM (**Belém Action Mechanism**), que busca ser el primer instrumento operativo del Programa de Trabajo sobre Transición Justa.
- Su objetivo es asegurar financiamiento público, apoyo técnico y gobernanza participativa para una transición que no reproduzca desigualdades.
- Países como Sudáfrica, Kenia y Colombia lideraron su promoción, con fuerte respaldo de la sociedad civil global.
- Se enfatizó la necesidad de incluir a pueblos indígenas, sindicatos, juventudes y comunidades locales en su diseño y gobernanza.
- Se debatió sobre diferencias conceptuales en torno a “justicia”, evidenciando las asimetrías Norte-Sur también en este eje.
- Aunque aún no ha sido adoptado como un mecanismo oficial, el BAM refleja una demanda creciente por institucionalizar la justicia climática en el marco de la CMNUCC. Podría convertirse en una de las decisiones emblemáticas de la COP30.

Durante años, la transición justa fue mencionada en los documentos climáticos como un principio deseable, pero con escasa traducción en mecanismos concretos. En la conferencia SB62 celebrada en Bonn, esa narrativa comenzó a mutar hacia una dimensión operativa, a partir de propuestas del Sur Global que buscan dotar de institucionalidad, financiamiento y gobernanza a este concepto.

Uno de los avances más notables fue el impulso a la creación del Belém Action Mechanism (BAM), una propuesta nacida desde el trabajo articulado de países como Sudáfrica, Kenia, Colombia, representantes de AILAC, y apoyada por varios Estados insulares. Este mecanismo fue concebido como una herramienta específica para canalizar recursos financieros, asistencia técnica y fortalecimiento institucional a los procesos de transición hacia economías bajas en carbono, garantizando que dichos procesos no reproduzcan desigualdades preexistentes ni comprometan los derechos de los sectores más vulnerables.

El BAM busca situarse como una columna vertebral del Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP), adoptado en la COP27, pero aún carente de implementación efectiva. La importancia del BAM radica en su potencial de anclar el principio de justicia climática en instrumentos vinculantes y financiados, alejándose de los marcos voluntarios y narrativas vacías. Entre sus componentes se proponen: líneas de financiamiento público no reembolsable, fondos de reconversión laboral y productiva, programas de participación comunitaria en planes de descarbonización, y garantías para procesos de gobernanza con equidad territorial y de género.

Un elemento central en las discusiones de Bonn fue el rol de las comunidades afectadas y las voces históricamente excluidas, como pueblos indígenas, trabajadores de sectores extractivos, juventudes y mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de varios Estados del Sur, presionaron con fuerza para que estas voces tengan un rol protagónico tanto en el diseño como en la gobernanza del BAM. Esta presión se sustentó en el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”, proponiendo una arquitectura multiactor que supere la actual tendencia a la captura corporativa de los procesos de transición energética.

En paralelo, emergió con fuerza el debate sobre qué se entiende por “justo” en distintos contextos geográficos. Mientras países industrializados promovían nociones centradas en seguridad energética o empleos verdes, países del Sur reivindicaban una noción más amplia que abarca historia colonial, deuda ecológica y derechos humanos. Esta diferencia conceptual no es menor: marca el tipo de políticas que podrían financiarse y quiénes serían los beneficiarios prioritarios.

En cuanto al resultado formal, se adoptaron conclusiones y una nota informal (“informal note”) que incluye principios orientadores del JTWP, como derechos, equidad y participación, así como opciones abiertas sobre disposiciones institucionales y temas sensibles como comercio y energía. El texto aún está sujeto a negociación en la COP30.

También se destacó la importancia de habilitar espacios de negociación a alto nivel entre sesiones, como reuniones de jefes de delegación o talleres intersesiones, para acercar posiciones y preparar un resultado ambicioso en la COP30. Brasil, como presidencia entrante, fue llamado a ejercer un rol facilitador.

A nivel político, los avances en transición justa son también una respuesta a la creciente frustración del Sur Global frente a la asimetría de beneficios y cargas en la acción climática. El BAM aparece así como una herramienta de equilibrio: un intento de asegurar que la transición no sea solo baja en carbono, sino también socialmente justa, territorialmente sensible y políticamente soberana. Aunque aún no ha sido aprobado formalmente, su creciente legitimidad y anclaje territorial lo posicionan como un punto clave para la agenda de la COP30 en Belém.

Foto: UN Climate Change - Lara Murillo



Temas para ponerle atención camino a la COP30:

1. ¿Será aprobado el BAM como parte del resultado oficial de Belém?
2. ¿Qué criterios de financiamiento incluirá: solo empleo verde o también justicia histórica?
3. ¿Se garantizará la participación real de comunidades afectadas y no solo representación simbólica?
4. ¿Cómo se articulará el BAM con otros mecanismos financieros y técnicos de la CMNUCC?
5. ¿Qué rol jugarán los países desarrollados: financiarán con responsabilidad o bloquearán su alcance?
6. ¿Cómo evitar que el BAM sea capturado por grandes empresas o fondos privados?
7. ¿Se vinculará la transición justa con la descarbonización de sectores estratégicos como energía, transporte y minería?
8. ¿Cómo se abordarán las medidas unilaterales en este contexto para evitar que obstaculicen los acuerdos?
9. ¿Ejercerá Brasil un liderazgo efectivo para movilizar acuerdos políticos sobre este eje?

Foto: UN Climate Change - Lara Murillo



2. FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO: UN TECHO DE CRISTAL QUE NO SE ROMPE

Puntos Clave:

- El NCQG sigue sin definiciones claras sobre montos, instrumentos y distribución entre mitigación y adaptación.
- El Sur Global exige excluir del cómputo los préstamos comerciales y flujos especulativos como “financiamiento climático”.
- Las discusiones revelaron un choque entre una visión de justicia financiera (G77 + China) y una lógica de rentabilidad e inversión privada (países desarrollados).
- El Baku to Belém Roadmap fue presentado, pero carece de metas vinculantes o cronogramas claros.
- Diversas organizaciones alertaron sobre una nueva arquitectura basada en deuda, que profundiza la injusticia estructural.
- El principio de CBDR-RC fue reafirmado como elemento no negociable por parte del Sur Global.

La promesa de escalar el financiamiento climático hacia niveles que permitan enfrentar la magnitud de la crisis sigue topándose con una barrera estructural: la falta de voluntad política del Norte Global para transformar las reglas del juego. La conferencia SB62 en Bonn evidenció una vez más este estancamiento. Aunque se avanzó formalmente en la discusión del Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG), el nuevo marco de financiamiento climático que reemplazará la meta de USD 100.000 millones anuales—, los resultados estuvieron muy por debajo de lo que el Sur Global espera para garantizar una transición justa y sostenible.

Las delegaciones del G77 + China llevaron a Bonn una demanda clara: que el nuevo objetivo no se limite a reciclar las promesas rotas del pasado, sino que corrija las distorsiones históricas del sistema de financiamiento climático. Esto implica, en primer lugar, definir con precisión qué se entiende por “financiamiento climático”. Países como Bolivia, Pakistán, Tanzania y Egipto insistieron en que no puede llamarse financiamiento climático a los préstamos comerciales o inversiones que benefician a las mismas economías que causaron el problema. Es como si una persona incendiara tu casa y luego te ofreciera un préstamo para reconstruirla pero con interés. Este tipo de mecanismos, argumentaron, terminan profundizando la deuda del Sur en nombre de la acción climática.

Además, los países en desarrollo subrayaron la necesidad de que el NCQG reafirme la centralidad del financiamiento público, concesional y sin condicionalidades, garantizando el acceso directo y simplificado a fondos para mitigación, adaptación y pérdidas y daños. Esta posición se sustenta en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas (CBDR-RC), piedra angular del sistema multilateral climático que los países desarrollados han intentado diluir. La insistencia del Norte en mecanismos de movilización de capital privado fue vista por muchos como un intento de externalizar la carga financiera hacia países que no causaron la crisis.

sistema multilateral climático que los países desarrollados han intentado diluir. La insistencia del Norte en mecanismos de movilización de capital privado fue vista por muchos como un intento de externalizar la carga financiera hacia países que no causaron la crisis.

En este contexto, se presentó el “Baku to Belém Roadmap”, una hoja de ruta política impulsada por la presidencia de la COP30 que busca orientar la transición entre el financiamiento actual y el nuevo marco a ser adoptado en la COP30. Sin embargo, su contenido fue calificado por varias entidades como vago, insuficiente y carente de ambición. El roadmap evita establecer montos concretos, no aclara los tipos de instrumentos financieros a utilizar y omite comprometer una proporción mínima para financiamiento de adaptación, el cual históricamente ha recibido menos del 30% del total. Para múltiples países africanos y del Caribe, esta omisión amenaza con dejar desprotegidas a las poblaciones más vulnerables frente a los impactos climáticos en curso. El Sur Global fue enfático en recordar que no hay justicia climática sin justicia financiera. Esto implica financiamiento público, sin condicionalidades, que llegue directo a los países y comunidades que más lo necesitan. Como lo señaló el grupo G77 + China, no se puede seguir transfiriendo la factura de la crisis a quienes menos la provocaron.

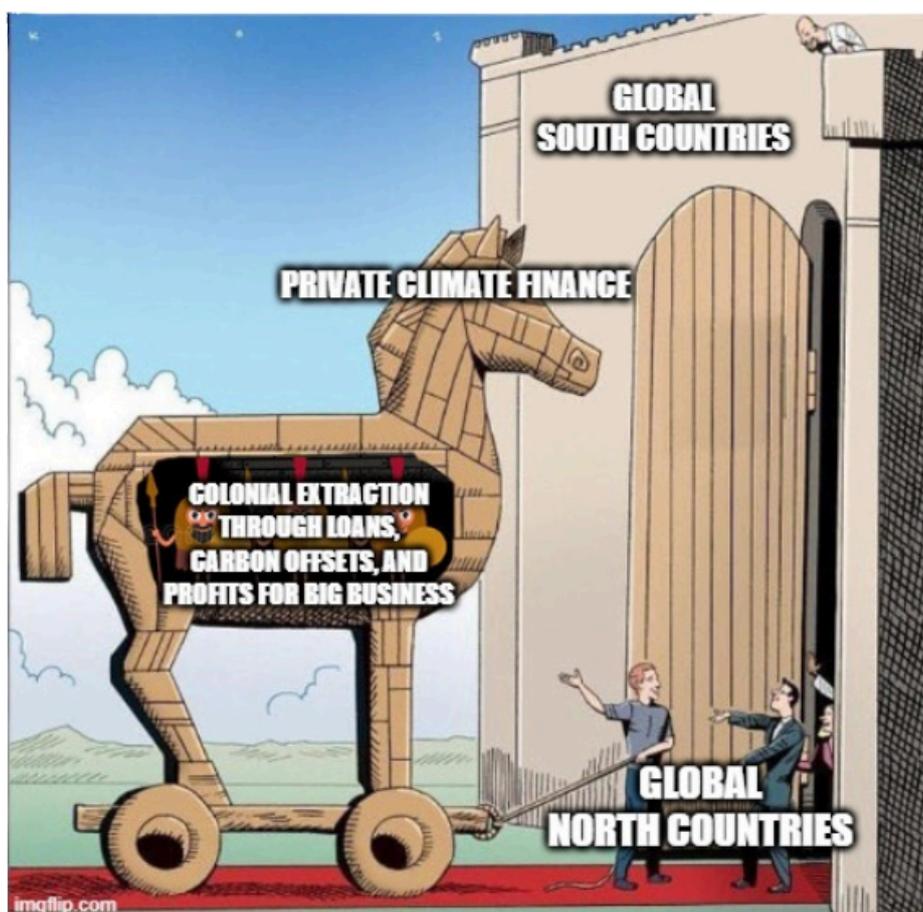
Organizaciones como Oxfam Internacional, ACT Alliance y el Third World Network denunciaron en duros términos que el rumbo del NCQG parece orientarse a consolidar una arquitectura de financiamiento basada en deuda, disfrazada de solidaridad climática. Según Oxfam, por cada dólar entregado en financiamiento climático, más de la mitad se devuelve al Norte en forma de pagos de deuda o ganancias para fondos privados. ACT Alliance, por su parte, alertó que sin una reforma profunda del sistema financiero internacional, el NCQG no será más que una fachada sin impacto real.

Más allá de los números, lo que está en juego en estas negociaciones es la legitimidad del sistema multilateral. La incapacidad de los países desarrollados de cumplir con sus compromisos anteriores, sumada a su resistencia a redefinir la arquitectura financiera, socava la confianza del Sur Global y erosiona el fundamento ético de la acción climática colectiva. Para muchos países, especialmente los más endeudados, el financiamiento climático se ha transformado en una trampa: no sólo no reciben el apoyo prometido, sino que además se les exige asumir nuevos compromisos de mitigación sin los medios para implementarlos.

En suma, el financiamiento climático continúa siendo el talón de Aquiles de la acción climática global. Mientras los países ricos eluden compromisos reales, el Sur Global acumula frustración y desconfianza. Si el NCQG no rompe con la lógica de deuda, condicionalidad y concentración, corremos el riesgo de repetir el fracaso del pasado, pero con una crisis cada vez más profunda. El NCQG corre el riesgo de replicar el fracaso de la meta de los USD 100.000 millones. De cara a la COP30 en Belém, el desafío será traducir el descontento creciente en presión diplomática eficaz, capaz de torcer el rumbo de una arquitectura que hasta ahora ha servido más a los donantes que a los pueblos afectados.

Temas para ponerle atención camino a la COP30:

1. Temas para observar camino a la COP30
2. ¿Se establecerá un monto mínimo vinculante en el NCQG, superior al piso de USD 100.000 millones?
3. ¿Qué proporción del financiamiento será destinada a adaptación y pérdidas y daños?
4. ¿Se reconocerá la deuda ecológica del Norte como base de un nuevo enfoque redistributivo?
5. ¿Se excluirán los préstamos comerciales y los fondos privados con retorno financiero del cómputo oficial?
6. ¿Habrá mecanismos claros para evitar la condicionalidad y garantizar el acceso directo al financiamiento?
7. ¿Se aprovecharán las instancias previas a la COP30, como el BRICS+, la UNGA o la Semana del Clima, para acercar posiciones?
8. ¿Se integrará el NCQG con reformas en instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial?
9. ¿Se avanzará en un marco multilateral de alivio de deuda vinculado a la acción climática?



Fuente: ECO 5, SB62 (19 de junio de 2025), Climate Action Network

3. PÉRDIDAS Y DAÑOS: ¿DÓNDE ESTÁN LOS RECURSOS?

Puntos Clave:

- El Fondo de Pérdidas y Daños ya está operativo desde abril de 2025, pero no se avanzó en Bonn en compromisos financieros concretos.
- No existe aún un acuerdo sobre fuentes predecibles, públicas y no condicionadas de financiamiento.
- Países del G77 + China exigen que el fondo funcione bajo principios de justicia reparativa y con acceso directo y descentralizado.
- Los países desarrollados evitaron asumir compromisos vinculantes o aclarar su nivel de contribución.
- No hubo avances en mecanismos innovadores de recaudación como tasas sobre transporte internacional o subsidios fósiles.
- Se corre el riesgo de que el fondo se transforme en una estructura vacía, con bajo impacto práctico.

La entrada en funcionamiento del Fondo de Pérdidas y Daños en abril de 2025 fue recibida como una victoria histórica para los países del Sur Global, quienes durante décadas demandan el reconocimiento de los daños irreversibles causados por el cambio climático. Sin embargo, el optimismo inicial se ha ido desvaneciendo ante la ausencia de compromisos financieros concretos y la falta de avances sustantivos en las discusiones celebradas durante la conferencia SB62 en Bonn.

Si bien el fondo ya está técnicamente operativo, en Bonn no se avanzó en establecer nuevas fuentes de financiamiento, ni en asegurar su previsibilidad o sostenibilidad a largo plazo. La agenda evitó abordar de forma explícita la cuestión de su capitalización estructural, lo que generó preocupación entre los países más vulnerables y organizaciones de la sociedad civil. Para muchos, el riesgo es claro: que el fondo se transforme en un logro simbólico sin impacto real, atrapado en la lógica de anuncios voluntarios, transferencias condicionadas y promesas sin seguimiento.

Voces críticas del G77 + China, en particular de países como Vanuatu, Egipto, Bolivia y Bangladesh, alertaron que no hay claridad sobre cómo se distribuirán los recursos, quién podrá acceder a ellos y bajo qué criterios. En este sentido, exigieron que el fondo se estructure bajo principios de justicia reparativa, con flujos públicos, no condicionados y accesibles, priorizando a comunidades en primera línea de vulnerabilidad. No todo fue crítica, también presentaron propuestas concretas, como directrices técnicas accesibles, mecanismos simplificados de acceso y metodologías para estimar el costo real de las pérdidas y daños, con el fin de facilitar solicitudes de apoyo desde los países más afectados.

La discusión también se vio atravesada por una tensión persistente: el silencio de los países desarrollados frente a su responsabilidad histórica en la generación de pérdidas y daños. Estados como Estados Unidos, la Unión Europea y Japón evitaron comprometer nuevas contribuciones, y, en cambio, reiteraron su intención de “movilizar recursos” sin establecer montos ni mecanismos. Esta ambigüedad fue duramente criticada por redes como Loss and Damage Collaboration y Climate Action Network (CAN), quienes advirtieron que se está construyendo una arquitectura financiera sin contenido, un cascarón institucional sin músculo económico. Además, señalaron que si el fondo no logra responder a las recomendaciones del Balance Global (GST), se perderá una oportunidad clave para alinear la justicia climática con los compromisos de implementación del Acuerdo de París.

Otro punto de tensión fue la falta de discusión sobre fuentes innovadoras de financiamiento, como impuestos a emisiones del transporte marítimo y aéreo, impuestos a transacciones financieras internacionales o redireccionamiento de subsidios fósiles. Aunque estos mecanismos cuentan con creciente respaldo de parte de la sociedad civil y varios Estados insulares, su incorporación fue postergada para futuras sesiones, dejando abierta la posibilidad de que nunca lleguen a implementarse por falta de consenso político.

En definitiva, el fondo de pérdidas y daños se encuentra en una encrucijada. Tiene estructura, tiene gobernanza preliminar y tiene una legitimidad política creciente. Pero carece de lo más esencial: recursos concretos, transparentes y suficientes. Es como tener una ambulancia nueva, con sirena y luces, pero sin combustible. Si no se llena el tanque con financiamiento real, el fondo no podrá llegar a donde más se necesita. De no revertirse esta situación, la frustración en el Sur Global podría escalar, socavando la confianza en el sistema multilateral y debilitando el espíritu de cooperación que sostiene la Convención.

Temas para ponerle atención camino a la COP30:

1. ¿Se establecerán compromisos financieros nuevos, claros y anuales para el Fondo de Pérdidas y Daños?
2. ¿Habrá definiciones vinculantes sobre accesibilidad, elegibilidad y distribución de los recursos?
3. ¿Se incluirán mecanismos innovadores de financiamiento en el acuerdo de Belém?
4. ¿Cómo se evitará la duplicación o interferencia con otros fondos como el GCF o el Adaptation Fund?
5. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento se establecerán para garantizar cumplimiento?
6. ¿Se garantizará la participación real de comunidades afectadas en la toma de decisiones del fondo?
7. ¿Se reconocerá explícitamente la deuda ecológica del Norte como base de financiamiento para pérdidas y daños?

4. NDCS 3.0 Y BALANCE GLOBAL: DISPUTA POR LA NARRATIVA

Puntos Clave:

- EE.UU., UE y aliados impulsan una arquitectura de transparencia robusta para comparar NDCs y presionar por ambición.
- El grupo LMDC rechaza el monitoreo colectivo por temor a condicionalidades, vigilancia o pérdida de soberanía.
- El Sur Global defiende el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas (CBDR-RC) como criterio fundamental para evaluar contribuciones.
- El Balance Global (GST) se convierte en un campo de disputa narrativa: ¿quién mide qué, cómo y para qué?
- Existe temor de que los NDCs 3.0 se usen para imponer modelos externos o estándares sin contexto.
- Organizaciones de la sociedad civil alertan sobre una “ambición condicionada” basada en financiamiento o acceso privilegiado.

La conferencia SB62 dejó al descubierto que el proceso hacia los NDCs 3.0, as nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional a presentarse en 2025, no será simplemente técnico, sino profundamente político y disputado. Las discusiones en Bonn revelaron que, lejos de existir una narrativa común sobre lo que constituye “ambición climática”, los países están librando una batalla por el control de los criterios, la narrativa y los mecanismos de seguimiento.

Estados Unidos, la Unión Europea y aliados como Canadá y Japón empujaron con fuerza la idea de establecer una “arquitectura de transparencia robusta”, que permita comparar los compromisos de todos los países, evaluar su suficiencia y aplicar presión política sobre quienes “no estén alineados con la trayectoria del 1.5°C”. Esto incluiría nuevas metodologías comunes, sistemas de reporte más exigentes y espacios públicos de revisión entre pares.

Desde una lectura superficial, estos esfuerzos podrían parecer razonables. Sin embargo, para amplios sectores del Sur Global, especialmente el grupo de Países con Ideas Afines (LMDC), conformado por China, Irán, Arabia Saudita, entre otros, este tipo de propuestas representan una forma encubierta de vigilancia climática y condicionalidad geopolítica. A su juicio, estos mecanismos podrían ser usados para imponer modelos homogéneos de transición, presionar reformas estructurales o castigar a quienes no adopten determinadas tecnologías o estándares, sin considerar su contexto nacional o sus capacidades reales.

La raíz del conflicto no es solo técnica, sino ontológica: ¿quién tiene el poder de definir qué es una contribución “ambiciosa”? ¿Cuál es el lugar de la equidad en la arquitectura del Acuerdo de París? Mientras el Norte promueve métricas cuantitativas y universales, el Sur insiste en que los NDCs deben considerar diferencias estructurales de capacidad, responsabilidades históricas y necesidades de desarrollo. Para el grupo

africano, AILAC y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), cualquier sistema de seguimiento debe estar anclado en el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas (CBDR-RC).

En este marco, el **Balance Global (Global Stocktake - GST)** se convierte en el escenario clave donde se disputa la narrativa climática internacional. Lo que originalmente fue concebido como un ejercicio de revisión colectiva para “elevar la ambición” se ha transformado en **un espacio de tensiones sobre soberanía, legitimidad y justicia climática**. Durante SB62, las negociaciones sobre el mecanismo que debía traducir el GST en acción (el llamado UAE Dialogue) terminaron sin acuerdo. La falta de consenso sobre su alcance, frecuencia y resultados dejó en suspenso la pregunta central: ¿cómo se implementarán realmente los hallazgos del Balance Global?

El Sur Global exige que el GST no solo evalúe emisiones y metas, sino también los compromisos de financiamiento, transferencia tecnológica y apoyo a adaptación. De lo contrario, argumentan, **se corre el riesgo de que se utilice para señalar con el dedo a los países pobres mientras se invisibilizan los incumplimientos del Norte**. A esto se suma la preocupación por el lento avance en la entrega de NDCs 3.0. Hasta ahora (junio 2025), sólo 24 países han presentado sus NDC3.0 con nuevas metas para 2035, y la mayoría se espera que lo entreguen para septiembre, antes de la COP30. La incertidumbre es doble: no solo sobre **qué** se entregará, sino también sobre **cómo** se medirá su ambición y **quién** establecerá ese estándar.

Además, se discutió el temor de que los nuevos NDCs 3.0 se vean influenciados por agendas corporativas, exigencias de acceso a mercados o instrumentos financieros alineados con intereses del Norte. Varios actores de la sociedad civil advirtieron sobre el riesgo de una “ambición condicionada”: **prometer más solo si hay dinero, tecnología o acceso preferente a instrumentos internacionales**, lo cual podría reproducir relaciones de dependencia y subordinación. En otras palabras, el peligro es que los NDCs se conviertan en cheques en blanco firmados desde el Sur, pero redactados desde el Norte.

En resumen, la disputa por los NDCs 3.0 no es solo sobre cuánto se promete, sino quién define el estándar, qué se considera suficiente y qué consecuencias trae no alinearse. Lo que se juega en esta etapa es el futuro del multilateralismo climático: si será un espacio verdaderamente justo y cooperativo, o uno más de presión asimétrica disfrazada de transparencia técnica.

Temas para ponerle atención camino a la COP30:

1. ¿Se establecerán criterios diferenciados de evaluación entre países desarrollados y en desarrollo?
2. ¿Qué rol jugará la equidad en la revisión de los NDCs 3.0?
3. ¿El Balance Global incorporará también compromisos de financiamiento, tecnología y adaptación, o solo emisiones?
4. ¿Cómo se protegerá la soberanía de los países del Sur frente a condicionalidades disfrazadas de “transparencia”?
5. ¿Qué mecanismos existen para evitar la captura corporativa de los compromisos climáticos nacionales?

1. ¿Se garantizará que los nuevos NDCs sean compatibles con los derechos humanos, justicia social y necesidades territoriales?
2. ¿Habrá espacio para compromisos colectivos del Sur Global que integren desarrollo sostenible y resiliencia climática?

Foto: UN Climate Change - Lara Murillo



5. ADAPTACIÓN, OCÉANOS Y AGRICULTURA: LA AGENDA ESTRUCTURAL DEL SUR GLOBAL

Puntos Clave:

- El Objetivo Global de Adaptación (GGA) sigue estancado por la falta de acuerdo sobre indicadores comunes (más de 490 propuestas).
- Países insulares exigieron integrar el océano como componente transversal, rechazando su uso como sumidero tecnológico sin salvaguardas.
- Aumenta el riesgo de geingeniería marina sin regulación clara, impulsada por intereses de mitigación rápida desde el Norte.
- En agricultura, persiste el choque entre agroecología y modernización del agronegocio, sin una integración efectiva de las propuestas del Sur.
- La adaptación sigue siendo tratada como un tema técnico, con baja ambición política y sin financiamiento suficiente.
- Adaptación, océanos y agricultura son pilares para la resiliencia del Sur Global, no notas al pie de la acción climática.

Mientras los focos políticos de la conferencia SB62 se concentraban en financiamiento, transición justa y el debate sobre los NDCs 3.0, la agenda de adaptación, junto a los temas de océanos y agricultura, transitó en un plano más técnico, pero no menos estratégico. Sin embargo, para los países del Sur Global, estas dimensiones no son accesorios técnicos, sino la línea de defensa frente a una crisis que ya golpea territorios, medios de vida y vidas humanas.

Adaptación:

En el caso de la adaptación, las negociaciones en torno al Objetivo Global de Adaptación (GGA) continuaron empantanadas por la falta de consenso en los indicadores comunes para medir avances. Se presentaron más de 490 indicadores, sin que emergiera un marco simplificado, coherente y representativo. Esta dispersión evidencia no solo un problema técnico, sino que revela la falta de una visión compartida sobre qué significa adaptarse al cambio climático. ¿Infraestructura gris, construir diques, fortalecimiento comunitario, mejora de capacidades, reducción de vulnerabilidad, recuperar ecosistemas, o todas a la vez?

Países del Sur, especialmente los más vulnerables como los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), exigieron que los indicadores reflejen sus realidades concretas y no reproduzcan los marcos de medición impuestos desde el Norte. La preocupación central es que una adaptación “medida desde arriba” pueda legitimar proyectos que no transforman la vida de las comunidades vulnerables, sino que sirven a intereses financieros o geoestratégicos. Además, se cuestionó la desconexión entre los compromisos del Balance Global (GST) y los instrumentos de implementación. Si el GGA no avanza, las metas de adaptación seguirán siendo promesas sin contenido.

Océanos: el 70% del planeta, el 0% del texto.

Los océanos regulan el clima, sustentan comunidades costeras, absorben parte del CO₂ que emitimos y nos entregan el 50% del oxígeno que respiramos. Y sin embargo, siguen siendo invisibles en los principales acuerdos climáticos.

Las delegaciones insulares y organizaciones científicas plantearon con fuerza la necesidad de integrar los océanos como un pilar transversal de la agenda climática. Sin embargo, sigue ocupando un lugar marginal en los textos oficiales y procesos de toma de decisiones. Esta omisión no es neutra: abre la puerta al avance de propuestas de geoingeniería marina, como la fertilización oceánica o el almacenamiento de carbono en aguas profundas, sin una evaluación clara de sus impactos ambientales, sociales o éticos.

Los países insulares alertaron sobre el riesgo de que el océano se convierta en un “sumidero de última instancia”, es decir, en un espacio donde se descargan las promesas de mitigación tecnológica sin considerar las consecuencias para la biodiversidad marina ni para los pueblos costeros. Frente a ello, exigieron una acción climática oceánica basada en derechos, en ciencia independiente y en participación comunitaria, más que en promesas inciertas de captura de carbono.

Agricultura: modelos en disputa.

El tema de la agricultura volvió a evidenciar un choque de visiones. Por un lado, actores del Norte y grandes exportadores agrícolas impulsaron enfoques centrados en la “resiliencia climática del agronegocio”, proponiendo soluciones tecnológicas como semillas modificadas, digitalización de cultivos o expansión del riego tecnificado. Por otro lado, delegaciones del Sur, organizaciones campesinas y movimientos por la soberanía alimentaria defendieron enfoques agroecológicos, basados en el conocimiento tradicional, la diversificación productiva y la recuperación de suelos.

Este conflicto no es meramente metodológico: es una disputa por el modelo de desarrollo rural y por quién define qué es “resiliencia”. Mientras los enfoques tecnocráticos priorizan productividad y eficiencia, los enfoques agroecológicos ponen el foco en la autonomía, la equidad y la sostenibilidad territorial. En adaptación, el cómo importa tanto como el cuánto.

Lamentablemente, en Bonn prevaleció una narrativa tecnificada, sin avances sustantivos para transformar los sistemas agroalimentarios desde la justicia climática y la seguridad alimentaria.

Temas para ponerle atención camino a la COP30:

- ¿Se logrará acordar un conjunto mínimo de indicadores para operacionalizar el GGA?
- ¿Se reconocerá al océano como pilar estructural del sistema multilateral climático en Belém?

1. ¿Cómo se regularán o restringirán las propuestas de geoingeniería marina en los textos finales?
2. ¿La adaptación incorporará criterios de justicia social, equidad territorial y participación de comunidades?
3. ¿Habrá avances para integrar enfoques agroecológicos en la agenda oficial de agricultura y clima?
4. ¿Se establecerá un mecanismo de financiamiento específico para adaptación basada en la naturaleza y la comunidad?
5. ¿El nuevo ciclo de NDCs incluirá metas explícitas y cuantificables en adaptación, además de mitigación?

Foto: UN Climate Change - Lara Murillo



6. GEOPOLÍTICA Y CMNUCC: EL ELEFANTE EN LA SALA

Puntos Clave:

- La CMNUCC evita abordar conflictos internacionales, pero estos condicionan las posiciones de los Estados.
- Las tensiones entre bloques (el genocidio y ocupación en Palestina, EE.UU.-Irán, medidas unilaterales del Norte, erosionan la confianza y dificultan los acuerdos.
- El grupo LMDC rechazó mecanismos de monitoreo colectivo, señalando preocupaciones por la soberanía y la equidad.
- El Sur Global denuncia la asimetría estructural del sistema climático y la instrumentalización de conceptos como transparencia o ambición.
- Se hace visible una crisis de legitimidad y gobernanza de la arquitectura diplomática climática, frente a un orden mundial cada vez más fragmentado.

Una de las características más notorias, y paradójicas, de la acción climática internacional es su pretensión de neutralidad política frente a un mundo profundamente fracturado. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) evita sistemáticamente referirse a conflictos geopolíticos, incluso cuando estos condicionan directa o indirectamente las posiciones de los Estados en las negociaciones. Esta omisión, lejos de blindar al proceso, ha evidenciado sus límites como espacio multilateral efectivo en tiempos de crisis global. Pero ignorar el elefante en la sala no lo hace desaparecer. Solo lo vuelve más difícil de esquivar.

Durante la conferencia SB62 en Bonn, esta tensión estructural volvió a emerger. Aunque el lenguaje oficial omitió referencias a conflictos, los posicionamientos estatales revelaron las huellas de un orden internacional cada vez más polarizado. Lo que se calla en los plenarios se cuela por los pasillos. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán, el genocidio y ocupación prolongada en Palestina y el resurgimiento de agendas nacionalistas, autoritarias o de seguridad energética en distintos bloques atravesaron soterradamente los debates sobre financiamiento, transparencia y gobernanza climática.

Uno de los momentos más tensos fue el bloqueo de la agenda de negociación durante las primeras 48 horas de la conferencia. La discusión giró, en parte, en torno al Artículo 9.1 del Acuerdo de París, que obliga a los países desarrollados a proveer financiamiento climático, y la negativa del Norte a tratarlo como punto formal. Esa demora fue la metáfora perfecta: cuando no se reconoce la raíz política de los desacuerdos, ni siquiera se puede empezar a hablar. Otro caso fue la portada del boletín “ECO” entregado por la red global de organizaciones de sociedad civil, Climate Action Network, dentro de la conferencia que denunciaba el silencio y censura de la CMNUCC frente a las protestas o cualquier alusión al genocidio en Palestina por parte de Israel o la guerra en Irán.

Uno de los ejemplos más evidentes fue la posición del Grupo de Países con Ideas Afines (LMDC), que incluye a Irán, China y Arabia Saudita, en relación con el seguimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). Este grupo se opuso con firmeza a la creación de mecanismos de reporte que pudieran interpretarse como una forma de vigilancia o condicionalidad, reivindicando la soberanía nacional como línea roja frente a cualquier intento de estandarización forzada de la “ambición climática”. Para estos países, el llamado a la transparencia robusta promovido por Estados Unidos y la Unión Europea responde más a una lógica de control que a una genuina búsqueda de cooperación.

En paralelo, los países del G77 + China insistieron en que la pérdida de confianza estructural entre bloques, acumulada por décadas de promesas incumplidas y responsabilidades desiguales, limita cualquier posibilidad de avanzar hacia un nuevo contrato climático global. La imposición de medidas unilaterales, como impuestos fronterizos por carbono o condicionalidades climáticas en tratados comerciales, fue interpretada como una expresión contemporánea de proteccionismo ambiental por parte del Norte. Muy buena podemos encontrar las ideas del CBAM europeo, pero desde la perspectiva de países como China, este puede tener la imposición de ciertas visiones (una conversación que sin duda da para largo).

Estas fracturas no sólo obstaculizan acuerdos sustantivos, sino que **erosionan la legitimidad de la CMNUCC como espacio de gobernanza multilateral**. La acción climática global, en este contexto, se encuentra atrapada entre su arquitectura diplomática formal y un entorno internacional donde la multipolaridad, la fragmentación de reglas y los conflictos prolongados son la norma. La ausencia de respuestas institucionales frente a estas tensiones refuerza la percepción de un sistema que **funciona más como escenario de disputa estratégica que como plataforma de cooperación efectiva**.

Frente a esto, diversos actores del Sur Global ,incluyendo organizaciones de la sociedad civil, académicos y negociadores, han comenzado a demandar una reforma estructural de la gobernanza internacional de la acción climática, y que reconozca explícitamente el contexto geopolítico en el que opera. No se trata de cambiar las reglas del juego, sino de preguntarse si este juego realmente permite que todos jueguen. Las propuestas van desde mecanismos de gobernanza más inclusivos y representativos, hasta la apertura a lecturas del cambio climático que reconozcan sus raíces políticas, históricas y sistémicas. Porque no se puede enfrentar una crisis global con herramientas que solo miden **toneladas de carbono y cierran los ojos a las desigualdades**.

En resumen, varias organizaciones proponen que si la CMNUCC quiere seguir siendo un espacio legítimo de cooperación global, deberá mirar al elefante a los ojos, nombrarlo y, sobre todo, dejar espacio para que otros lo nombren también.

Temas para ponerle atención camino a la COP30:

1. ¿Se abrirá un espacio de diálogo sobre gobernanza y reforma del sistema multilateral climática?
2. ¿Cómo influirán los conflictos geopolíticos activos en las alianzas de negociación en Belém?
3. ¿Persistirán los intentos del Norte por condicionar la cooperación climática a intereses estratégicos y económicos?
4. ¿Se visibilizará el rol de Palestina y otros países ocupados como actores legítimos dentro de la CMNUCC?
5. ¿Qué rol tendrán Brasil y los países amazónicos en reequilibrar la conducción política del proceso climático global?
6. ¿Podrá el Sur Global articular una posición común más ambiciosa que no sólo reaccione, sino proponga una nueva narrativa de justicia climática?



Fuente: ECO Newsletter, Climate Action Network

ALGUNAS CONCLUSIONES ENTRE LA URGENCIA MORAL Y LA OPORTUNIDAD POLÍTICA.

La conferencia SB62 en Bonn dejó en evidencia que el sistema multilateral climático internacional enfrenta una encrucijada histórica. Si bien no se rompieron los techos institucionales que limitan el avance hacia una arquitectura climática justa, sí se consolidó una conciencia generalizada de que no habrá progreso técnico sin redefiniciones políticas profundas. Las discusiones ya no giran únicamente en torno a porcentajes de mitigación o métricas de adaptación, sino sobre quién decide, quién paga y quién se beneficia del modelo actual de cooperación climática.

El camino a la COP30, que se celebrará en Belém,, queda marcado por tres dilemas centrales. En primer lugar, el Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG) debe definirse como un instrumento de reparación y solidaridad estructural, no como una plataforma para repetir esquemas de endeudamiento climático. Los países desarrollados deben abandonar la lógica de condicionalidad y riesgo financiero, y comprometer flujos públicos, concesionales y sin ataduras para apoyar a los países más vulnerables.

En segundo lugar, la transición justa debe pasar de ser un concepto aspiracional a un marco operativo concreto. La creación del Belém Action Mechanism (BAM) representa una oportunidad histórica para institucionalizar una transición que sea socialmente justa, territorialmente inclusiva y políticamente participativa. Este mecanismo debe contar con recursos, gobernanza representativa e incorporar la voz de comunidades, sindicatos, pueblos indígenas y juventudes.

En tercer lugar, la CMNUCC debe decidir si persistirá como un simulacro de multilateralismo o si asumirá un rol transformador. Para ello, deberá enfrentar el elefante en la sala: las asimetrías estructurales del orden mundial, que impiden la construcción de confianza y cooperación genuina. Escuchar al Sur Global no es un gesto de inclusión; es una condición para la legitimidad. Reconocer saberes no occidentales no es un favor: es justicia de carácter transversal. Abrir los espacios de gobernanza y redistribuir el poder de decisión son pasos imprescindibles para que la arquitectura climática global deje de ser un espejo del poder geopolítico y empiece a ser un instrumento de justicia planetaria.

La sociedad civil, por su parte, tiene un rol crucial para mantener viva la presión política y evitar que la COP30 sea un nuevo capítulo de promesas incumplidas. Las organizaciones ambientalistas, las juventudes, los movimientos feministas, los pueblos indígenas, los trabajadores y las comunidades deben ser protagonistas en la construcción de una arquitectura climática global alternativa, basada en justicia, equidad y reparación. Porque sin la energía organizada, ningún acuerdo será duradero. Y sin esperanza colectiva, ningún proceso será legítimo.

Algunos desafíos clave para la COP30:

1. Algunos desafíos clave para la COP30
2. Consolidar el BAM como instrumento operativo de transición justa en la COP30, garantizando financiamiento, gobernanza representativa y vinculación con el JTWP.
3. Redefinir el NCQG como un compromiso público, no condicionado y no basado en deuda, con un piso de USD 300 mil millones anuales desde 2025.
4. Reconocer el rol central del Sur Global en la arquitectura climática, incluyendo una mayor representatividad en órganos técnicos y de decisión.
5. Establecer salvaguardas claras frente a la instrumentalización de la transparencia y la ambición como herramientas de condicionamiento político.
6. Priorizar un enfoque sistémico de adaptación, incorporando océanos, agricultura y conocimientos tradicionales como pilares estructurales.
7. Avanzar hacia una reforma de gobernanza de la CMNUCC, reconociendo explícitamente los impactos geopolíticos y habilitando un diálogo político real.
8. Garantizar fuentes de financiamiento estables y accesibles para el Fondo de Pérdidas y Daños, que no dependan de la buena voluntad ni de créditos comerciales.

Preguntas que definirán Belém

1. ¿Podrá la COP30 convertir el financiamiento climático en un derecho, y no en una deuda?
2. ¿Tendrá la transición justa una arquitectura institucional real o seguirá atrapada en el discurso?
3. ¿Seremos capaces de construir un multilateralismo post-occidental, basado en la justicia climática y no en la dominación encubierta?

La COP30 en Brasil no puede ser una cumbre más. Es el momento de redefinir el pacto climático global desde la justicia, la equidad y la soberanía. Lo que se juega en Belém no es sólo el clima: es el futuro de las relaciones internacionales desde el cuarto a la mitad del Siglo XXI.

Para saber más:

Para seguir diferentes visiones y resultados de manera más sencilla y práctica sobre las negociaciones previo y durante la COP30 te recomendamos Climate Action Network (www.climatenetwork.org), Carbon Brief (www.carbonbrief.org), International Institute for Sustainable Development (www.iisd.org), entre otros.

Foto: UN Climate Change - Lara Murillo

